

Democracia y pandemia en la Argentina

Lilia Puig, Presidenta de la Fundación Alem, fundación oficial de la UCR, y Parlamentaria del Mercosur

La República Argentina enfrenta la pandemia del coronavirus con un gobierno que asumió el pasado 10 de diciembre. El Presidente Alberto Fernández representa a la coalición peronista Frente de Todos que llevó como Vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner.

El país tiene la mayoría de los infectados en las ciudades más numerosas del país y en la zona turística de Tierra del Fuego, habiendo situaciones disimiles en el interior donde hay provincias que no registran ningún caso y otras con pocos pero persistentes focos de infección.

La pandemia encontró a la Argentina con un importante déficit de camas, de terapias intensivas, de respiradores, de equipamiento para la protección del personal sanitario. Además, este no cuenta mayoritariamente con la formación adecuada para la atención de una enfermedad altamente infecciosa que requiere no sólo de resguardos sino también de los entrenamientos adecuados para los procedimientos médicos que exige una enfermedad que puede atacar gravemente las vías respiratorias de quienes se enferman.

El problema mencionado es más grave cuanto más lejos se está del centro del país. No hay en la Argentina un sistema de salud que abarque a todo el territorio ni a toda la población. La fragmentación no es sólo desde la dicotomía público privado. Como la prestación de los servicios de salud está a cargo de las provincias su calidad depende de los recursos presupuestarios y de las prioridades fijadas por sus gobiernos.

A esta debilidad de la infraestructura sanitaria se sumó durante los meses de enero y febrero la creencia equivocada del gobierno sobre la naturaleza del virus y su contagiosidad. Tanto el Presidente como el Ministro de Salud minimizaron su importancia por creer que era fácilmente eliminable o por confiar en que el verano y la lejanía respecto de China eran suficientes barreras epidemiológicas. En el discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Nación el 1 de marzo el Presidente no mencionó el problema. No estaba en la agenda gubernamental.

Sin embargo, cuando se hizo palpable que la pandemia llegaría a la Argentina y estalló la misma en los países de la Europa mediterránea, el gobierno, apoyado en infectólogos clínicos, cerró las fronteras del país y a la otra semana declaró la cuarentena nacional. La conciencia de la debilidad de la infraestructura sanitaria del país fue quizás el factor determinante de esa decisión. A partir de ese momento, a mediados de marzo, la población de toda la Argentina debió recluirse en sus domicilios con el objetivo de que los gobiernos

ganaran tiempo para preparar la atención incierta de futuros infectados y evitar una crisis de contagios como los que ocurrían en otras latitudes y en países cercanos de América Latina.

Lamentablemente, la demora en poner en la agenda institucional a la pandemia impidió la compra temprana de pruebas y reactivos para la detección del virus. La Argentina es uno de los países con menor testeo respecto de sus vecinos por no contar con los recursos necesarios para tal fin y ello ha transformado la salida de la cuarentena en un problema difícil para el gobierno nacional.

La cuarentena ha sido efectiva en cuanto a reducir la propagación nacional del virus pero la naturaleza de la misma ha afectado seriamente a la economía y a otros aspectos de la salud de los argentinos -fundamentalmente, a los enfermos crónicos de afecciones cardiovasculares, diabetes y problemas mentales que, por temor, han abandonado sus tratamientos.

La medida sólo permite una circulación restringida de personas, quienes deben estar vinculadas a la atención de la pandemia o a las necesidades de alimentación de la población. Es una decisión que no discrimina a la población con ningún criterio y ha traído enormes problemas a los argentinos que si bien están conformes en que se haya podido detener la expansión del virus no entienden, casualmente la falta de distinción geográfica y/o poblacional de la cuarentena.

El Presidente ha contado con el apoyo de la oposición parlamentaria para llevar adelante la primera cuarentena pero, ha habido críticas constructivas a su extensión. La Unión Cívica Radical ha reclamado por sí, y como integrante de la coalición Juntos por el Cambio, la necesidad de que el Presidente constituya un equipo multidisciplinario que no solo integre infectólogos clínicos de nota sino también epidemiólogos, economistas, especialistas en circulación y transporte, etc. para que se atienda la complejidad que supone la atención de la pandemia y sus consecuencias.

La oposición parlamentaria ha ofrecido al Presidente sus equipos técnicos y tiene propuestas para presentarle en orden a colaborar con la atención de los graves problemas emergentes que, en lo económico, han profundizado la recesión en la que se encuentra la economía argentina hace más de dos años.

Lamentablemente, el Presidente no sólo no ha respondido al pedido de audiencia de la oposición sino que ha permanecido en silencio frente al cierre del Congreso de la Nación y el de los tribunales.

La catástrofe sanitaria ha evidenciado, como siempre ocurre con este tipo de emergencias, los serios problemas de funcionamiento del régimen político democrático en la Argentina y ha desnudado los problemas del gobierno ante la opinión pública.

Desde lo institucional cabe mencionar que se ha profundizado la perspectiva hegemónica que caracterizó al gobierno desde diciembre cuando logró que el Congreso de la Nación le transfiriera facultades propias para atender una supuesta “emergencia” ligada a la negociación de la deuda externa y al incremento de la pobreza, problema estructural de la Argentina, por otro lado.

El cierre del Congreso solo puede entenderse desde esta postura previa. El reclamo de los partidos opositores y de la sociedad civil sobre el funcionamiento del Congreso ha sido recepcionado en la Cámara de Diputados que se presta a reiniciar sus funciones los primeros días de mayo.

Sin embargo, el Senado ha sido materialmente cerrado y la Vicepresidenta se niega a realizar reuniones presenciales de naturaleza alguna y a construir un reglamento para la emergencia. Marcha con la mayoría parlamentaria de la coalición de gobierno a imponer la agenda y un funcionamiento virtual sin la aprobación de la oposición.

La situación económica de la Argentina es grave. El Presidente de la Unión Cívica Radical la ha definido como un país sin moneda, sin ahorro y sin crédito que se encuentra ahora con un aparato productivo parado; con crisis para la colocación de sus exportaciones, fruto de la situación del comercio mundial, y con la necesidad de contar con insumos importados para hacer funcionar parte de su aparato industrial. Algunas estimaciones colocan la caída de la producción argentina en más de 5 puntos del PBI y encima debe resolver el problema de la deuda externa.

Si bien la oposición parlamentaria acompaña al gobierno en su negociación externa ha dejado claro que es necesario continuar las negociaciones y evitar el default. Uno de los problemas que acechan en este sentido es que no hay una posición unívoca de la coalición que gobierna al respecto. El gobierno se ha manifestado hasta ahora como bifronte con una cabeza en la Presidencia y otra en el Senado y existe, respecto de la deuda, una tensión entre los que sostienen la necesidad de llevar la negociación a buen puerto y quienes creen que no hay que adquirir compromisos de pago.

Esta misma tensión dentro del gobierno se ha notado en la distribución de los cargos dentro de la estructura gubernamental y también en la política exterior donde por momentos predomina una estrategia nacionalista, aislacionista y de ruptura de los acuerdos regionales en busca de nuevos vínculos en el plano internacional que llevarían inevitablemente tanto a un retiro del Mercosur como del G20. La búsqueda de apoyo internacional para la negociación de la deuda se entiende como una jugada ocasional sin que ello implique un compromiso del gobierno con la continuidad de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, tratado que fue despreciado en la campaña electoral por la coalición gobernante. No obstante, el gobierno tiene también presiones internas en el sentido contrario. En realidad, la lucha permanente por cargos y recursos y la orientación más o

menos dogmática de la política exterior y de la vinculación con los empresarios del campo y la ciudad son rasgos del gobierno.

La Argentina enfrenta en estos días la agudización de los problemas institucionales de su democracia republicana con amenazas sobre la libertad de expresión, el abandono a políticas de transparencia de la administración pública, el riesgo de la vuelta a una política internacional aislacionista y la presión sobre la justicia para el logro de la impunidad de quienes fueron protagonistas de la corrupción de gobiernos pasados y cuyos juicios mayormente se han detenido.

La pandemia sólo ha permitido acelerar los tiempos para constatar el retorno de perspectivas negativas para el cumplimiento de las exigencias del estado democrático de derecho y de la constitución. Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en la Provincia de Buenos Aires con la suelta indiscriminada de delincuentes con antecedentes de delitos graves contra la vida, el cuerpo de mujeres y niños y la propiedad. Hechos que han sido avalados por el grupo gobernante en la provincia de Buenos Aires y que han producido una gran reacción social.

A principios de mayo el gobierno enfrenta la necesidad de atender en forma diferenciada a las poblaciones argentinas y no se ha presentado un plan consistente para el fin de la cuarentena corriéndose el riesgo de salidas anárquicas de una población atemorizada por la pérdida del empleo, la caída de los ingresos y la falta de trabajo que se han magnificado en las últimas semanas.

La falta de jerarquización política de las instituciones republicanas de gobierno por parte de la coalición gobernante que prefiere los recursos decisionistas como los decretos de necesidad y urgencia al funcionamiento libre del Congreso es una amenaza cierta al régimen democrático. Si no hay un funcionamiento libre del Congreso no se puede controlar a un gobierno que ni siquiera ha presentado su propuesta de presupuesto. La Argentina es gobernada discrecionalmente sin que los ciudadanos conozcan el orden de prioridades de las políticas públicas ni los planes del gobierno.

Los argentinos esperan que el gobierno presente una salida ordenada de la cuarentena y la oposición parlamentaria está dispuesta a prestar colaboración para ello.
